



"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial

¿Democracia salvadoreña?

2

Político

Del partido al gabinete y viceversa: el nombramiento de funcionarios en ARENA

4

Económico

¿Arnold Harberger cambió de opinión?

6

Reporte IUDOP

La PNC cierra filas ante las críticas

8

Reporte IDHUCA

Patrones vestidos de ovejas

10

documento

Opinión de P. José María Tojeira a propósito de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social

12

documento

Resumen ejecutivo: Informe de Progreso Educativo en El Salvador 2006 (II)

14

La PNC cierra filas ante las críticas

En toda sociedad democrática, la policía como institución que ostenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza, y que tiene como misión principal garantizar la seguridad de los ciudadanos, debe contar con mecanismos reguladores de su función y estar abierta a la auditoría y el escrutinio ciudadano de su gestión. A su vez, toda policía profesional y moderna debe contar con indicadores confiables que le permitan evaluar objetivamente su desempeño, tomar decisiones respecto a la gestión y el manejo de recursos y rendir cuentas a la sociedad.

En un país como El Salvador que en la actualidad exhibe los índices más elevados de homicidios del continente, con tasas de 57 homicidios por cada cien mil habitantes, donde la inseguridad y el crimen violento son las principales notas de la cotidianidad, se impone la urgente necesidad de contar con una policía más profesional, transparente y efectiva en el desempeño de su labor. A catorce años de su creación, y luego de ser uno de los proyectos policiales que ha contado con más apoyo internacional, especialmente a nivel de asistencia y asesoría técnica, es inconcebible que siga presentando las mismas falencias institucionales que le fueron señaladas en sus inicios, sin que se hayan tomado acciones concretas para corregirlas.

Desde 1995, ONUSAL señaló en sus informes especiales que entre las principales debilidades detectadas al interior de la policía se encontraban la inexistencia de políticas de seguridad de mediano y corto plazo sustentadas técnicamente, señalándola como una institución reactiva y con una débil capacidad de planificación. A su vez, en este mismo informe se identificaban deficiencias operativas y organizativas relacionadas con la descoordinación entre las diferentes unidades y divisiones (Informe de ONUSAL, septiembre del 1995). Al respecto, una de las debilidades más relevantes ha sido la descoordinación entre las áreas de investigación y de seguridad pública, la cual ha obstaculizado la efectiva labor de investigación y el esclarecimiento de los casos. Este tipo de observaciones, han sido señaladas reiteradamente en diferentes análisis que sobre la policía han realizado diversas entidades a lo largo de los años, dado que la co-

ordinación interna es un aspecto clave que incide directamente en su efectividad operativa.

En tal sentido, es sumamente grave la reciente reacción del Director de la PNC frente a un documento borrador elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, dado a conocer en los medios de comunicación en días anteriores, en la que señalan falencias en la coordinación interna de la policía. La postura de descalificar de antemano las observaciones técnicas del documento señalando que actores externos están inhibidos de opinar sobre el trabajo policial porque no conocen su funcionamiento, muestra a nivel personal la falta de madurez y profesionalismo del funcionario, pero sobre todo la clara tendencia hacia la corporativización y autoritarismo a las que ha transitado la policía, en el que cerrar filas frente a las críticas suele ser ahora la reacción más natural.

Lamentablemente, esta reacción no parece ser casual ni aislada en el actual director de la PNC, ni en muchos funcionarios de la actual administración gubernamental. En el tema de seguridad, hay cada vez más una clara tendencia entre sus funcionarios a reaccionar negativamente frente a la posibilidad de crítica y de escrutinio de otros actores de la sociedad, con la típica respuesta de descalificación o de evasión de responsabilidad, señalando a otros como los culpables de sus propios males. Muestra de ello es la reacción que tienen frente a los cuestionamientos actuales sobre las tendencias de los homicidios, las cuales a juzgar por sus propias cifras, no han logrado bajar. Al respecto, es lamentable escuchar que a pesar de que en el mes de abril, se mantuvo el promedio diario de 10 homicidios, el director de la PNC y el Ministro de Seguridad y Justicia sigan asegurando que los homicidios están bajando cuando la mera lectura del dato indica todo lo contrario. Por otra parte, en consonancia con las cifras oficiales, la opinión pública muestra un incremento en la percepción de inseguridad del que no se tiene parangón en la última década. La encuesta de evaluación de finales del año realizada por el IUDOP reveló que el 76.2 por ciento de los salvadoreños considera que la delincuencia aumentó. A su vez, el 62.6 por ciento de los ciudadanos perciben que el gobierno

ha sido poco o nada efectivo para enfrentar la criminalidad, la cual constituye una de las áreas gubernamentales peor evaluadas por la ciudadanía.

Sin embargo, luego de tres años de manos duras, súper duras y más de una docenas de planes antidelincuenciales y cruzadas contra la delincuencia que se vienen impulsando con gran publicidad, las que a juzgar por las cifras de criminalidad han sido un fracasado, se esperaría mínimamente que la policía evalúe a partir de una análisis objetivo, las causas de tanta ineffectividad y que sean sus autoridades las interesadas en escuchar aportes que puedan mejorar su eficacia y éxito laboral.

Sin embargo, en vez de propiciar el análisis que les permita medir y valorar el desempeño de la institución y el impacto de sus acciones sobre la base de resultados concretos, vemos a un Director de la Policía y a un Ministro de Seguridad y Justicia empeñados en justificar más bien las causas de su propia incapacidad, depositando la culpa en otros actores o factores externos. Por ejemplo, en los últimos meses, ante la evidente incapacidad para controlar la delincuencia y el alza de los homicidios, estos funcionarios han retomado el tema de los deportados para justificar el auge delincencial, señalando que el incremento de los crímenes se debe principalmente a aquellos salvadoreños deportados de los Estados Unidos con antecedentes penales, especialmente los pandilleros. Así, rechazan la posibilidad de que las causas del auge delincencial esté asociada a factores domésticos como la ineffectividad policial.

No obstante, a estos servidores públicos se les olvida considerar que el país ha experimentado deportaciones masivas desde hace más de 10 años y aunque ciertamente en los últimos años éstas se han incrementado, no hay evidencia empírica que muestre que los delitos ocurridos en la actualidad sean cometidos mayoritariamente por los deportados. Según datos de Migración y Extranjería, revelada por algunos matutinos, de un total de 11,262 deportados de Estados Unidos y otros países, entre enero y octubre del 2006, el 21.6 poseen record delictivo, entre los cuales se encuentran 152 pandilleros, lo que corresponde al 1.34 por ciento del total de deportados. Esto indica que se trata de una minoría, al menos en lo relativo a deportaciones aéreas, de las cuales se tienen registros.

Como vemos, muchos de los argumentos presentados por nuestros funcionarios, no resisten el más mínimo análisis. Pero además, supone que en la medida en que se continúa con la tendencia a manejar argumentos superficiales y poco sustentados de la situación criminal en el país, se está retrasando la adopción de medidas efectivas para controlar la criminalidad. Esto finalmente termina afectando de manera directa a los ciudadanos, quienes son los que sufren los hechos de criminalidad y quienes además son la razón de ser de instituciones de servicio como la policía. Esta tendencia predominante en algunos de estos servidores públicos es fiel reflejo de los males que están aquejando a la administración pública actual. La falta de honestidad y responsabilidad de muchos funcionarios para reconocer sus deficiencias y limitaciones, producto en buena medida del sesgo ideológico con el que actúan, no les permite contar con la suficiente objetividad y profesionalismo para analizar los obstáculos y falencias que siguen obstaculizando el desarrollo de las instituciones.

Lo anterior, muestra también la falta de liderazgo de funcionarios que deberían asumir responsablemente la misión que han jurado cumplir. A nivel institucional, es reflejo de una cultura institucional autoritaria y poco transparente, en la que existe una escasa o nula noción de rendir cuentas al público de su gestión, porque simplemente los funcionarios no se perciben así mismos como servidores públicos. Por el contrario, en muchos de los casos, ven a las instituciones que dirigen como feudos, que pueden conducir de forma discrecional sin que nadie pueda señalarles sus fallas y de las que, en la mayoría de los casos, pueden sacar provecho personal.

En este escenario, se genera un ambiente institucional poco transparente proclive al surgimiento de prácticas de corrupción, de las cuales se tienen abundantes ejemplos en la actual administración gubernamental. En el caso de la policía y sus funcionarios, su cada vez más clara tendencia a restringir los ya escasos espacios de apertura hacia la sociedad civil, es expresión de los rasgos de autoritarismo y corporativismo que se han profundizado en la institución policial, con lo que se asemeja cada vez más a su antecesora la ex Policía Nacional.